Reseña Jurisprudencial (continuación)

67. Cabe declarar de oficio la existencia de cosa juzgada por el tribunal de apelación, si la decisión en recurso fue consentida por el apelante después de recurrirla, mediante proposición de pago de las obligaciones derivadas del juicio principal y de todos sus incidentes, aceptando su adversario esta proposición y homologando el tribunal el acuerdo realizado. (CCCCR, S. 4ª, 31.7.73, Zambrano, Rubén v. Andpel S.C.A.).

68. Cuando el acusado consiente expresamente el fallo el defensor no puede recurrirlo. (CPR, S. 2ª, Caffatti, José Alberto, 10.6.74).

COSTAS

REF.: **Allanamiento, 24**
Juicio ejecutivo, 192
Mandato, 225
Privilegios, 305
Recurso de aclaratoria, 364

69. Si el citado en garantía lo fue por iniciativa del actor y éste se allana a la improcedencia de la citación, el demandante ha de ser condenado en costas por haber dado lugar a la citación reconocida improcedente y no estar dispensado por el error que le es imputable. (CCCCR, S. 1ª, 16.4.73, Eguren, A. E. v. Omar García).

70. No obstante mediar allanamiento, las costas han de ser aplicadas al que se allana si ha dado lugar a la reclamación. (CCCCR, S. 1ª, 16.4.73, Eguren, A. E. v. Omar García).

71. El tribunal de alzada solo puede expedirse sobre imposición de costas vinculadas a trámites procesales en la inferior, si media recurso concedido y ulterior tramitación de procedimiento en segunda instancia. (CCCCR, S. 1ª, 30.4.73, Talarn, Jaime v. María Sara Iovachini).

72. Si el demandado se allanó a la demanda por consignación al contestarla sin controvertir los hechos en que la acción se fundara y sin producir prueba alguna que desvirtuara la medida solicitada por el demandante, queda reconocida la

Reseña Jurisprudencial (continuación)

164. Aunque penalistas y civilistas se pongan de acuerdo en que la culpa penal y la culpa civil son sustancialmente la misma, admitiendo que una y otra se aprecian en la misma medida o grado, los segundos se muestran más exigentes que los primeros en la apreciación de las circunstancias y en las causas de la irresponsabilidad. (CCCR, S. 1ª, 29.3.74, Perucca, Carlos v. La Martona S.A.).

165. Ni la absolución ni el sobreseimiento hacen cosa juzgada en materia civil, salvo los casos de inexistencia del delito o falta de autoría. (CCCR, S. 1ª, 29.3.74, Perucca, Carlos v. La Martona S.A.).

166. No cabe suspender una ejecución por virtud de denuncias criminales formuladas contra el ejecutante, porque si bien la sentencia ejecutiva implica cosa juzgada meramente formal, de contradecirla ulteriores conclusiones del proceso punitivo quedaría abierto el juicio ordinario de repetición. (CCCR, S. 2ª, 23.10.73, Goldin de Simajovich, M. v. Salvador Caterina).

167. La referencia establecida en el art. 1101 CC. en favor de la sentencia criminal, juega sólo cuando en sede civil se persigue la reparación de daños y perjuicios emergentes de delitos investigados en sede civil o cuasidelitos civiles. (CCCR, S. 3ª, 9.8.73, Invaldi, Irma v. Norma Minotti).

168. Aun cuando se descarte el carácter delictuoso del hecho imputado, nada impide que se considere en sede laboral a dicho evento, que sin llegar a configurar un delito, pudiera significar una injuria apta para legalizar un despido. (Del voto del Dr. Crespo). (CTR, S. 2ª, 6.9.73, Figueroa, Franklin v. John Deere Argentina).

169. Declarado, en sede penal, un hecho como inexistente o que no fue cometido por el imputado, ese pronunciamiento no puede revisarse en sede laboral (Del voto del Dr. Garguicevich). (CTR, S. 2ª, 6.9.73, Figueroa, Franklin v. John Deere Argentina).

170. De acuerdo al art. 1103 CC., no se podrá alegar en

Reseña Jurisprudencial (continuación)

251. En el trámite de ejecución hipotecaria la notificación por edictos ha de permitir al demandado oponer excepciones hasta el cumplimiento del plazo concedido desde la última publicación, porque de otro modo se coloca al presunto deudor en situación de inseguridad que incide en el cómputo del plazo referido. (CCCR, 3ª, 16.5.74, Caja de Créditos Acebal Coop. v. Carlos Ingaramo).

252. El decreto de llamamiento de autos queda notificado con relación al demandado rebelde desde la fecha de su dictado, por imperio de lo dispuesto en el art. 78 CPr.; por tanto, no hace falta la notificación por cédula. (CPLR, S. 1ª, 20.2.73, Cochini, Mario v. María N. Testa y otra).

253. Las únicas resoluciones que deben notificarse por cédula al demandado rebelde son la declaración de su rebeldía y la sentencia definitiva. Las restantes quedan notificadas en la oficina a partir de su fecha (art. 78 CPr.). (CPLR, S.2ª, 13.4.73, Bono, Simón v. Corbelli, Adolfo).

254. La norma del art. 66 CPr. sólo establece la obligación de no autorizar notificación por correo, si quien la solicita no acredita estar notificado de ella, pero no impone por su trasgresión sanción alguna de nulidad. En el caso, la falta de esa notificación a la actora, no le ocasionó perjuicio alguno al demandado, y la nulidad no puede prosperar, pues se la declararía por la nulidad misma, en abierta oposición al principio de trascendencia que consagra el CPr. art. 126. (CPLR, S. 2ª, 27.4.73, Campilongo, Juan V. v. Juan Mancini).

255. Si quien firma la cédula es el apoderado de la parte, queda automáticamente notificada del decreto o resolución que en ella se transcribe. (CPLR, S. 2ª, 27.4.73, Campilongo, Juan V. v. Juan Mancini).

256. El decreto que niega la concesión de un recurso no es de los mencionados en el art. 62 del CPC, y por tanto, no es obligatoria su notificación por cédula. No empece a tal conclusión el art. 356 del mismo código, porque cuando exige